



DEMOCRACIA E INDIANISMO EN LATINOAMÉRICA

Hugo E. Biagini

Tras los efectos deshumanizadores de la llamada Revolución Conservadora, acaecida durante el último tercio del siglo XX, en el panorama mundial y muy especialmente en buena parte de nuestra América se ha ido poniendo en tela de juicio —fáctica o teóricamente— la posibilidad de asociar la democracia —con su ética de la equidad y la solidaridad— a una ideología lobbista del provecho y el interés como la del neoliberalismo, hasta alcanzar a generarse la palmaria certidumbre de la incompatibilidad constitutiva existente entre ambas modalidades.

Simultáneamente, ha ido perdiendo terreno la convicción sobre las bondades intrínsecas de una democracia en la cual el pueblo no gobierna sino a través de sus declamados representantes; un credo erigido tras el supuesto agotamiento de las utopías sesentistas. Si bien las democracias delegadas y administradoras han implicado un crucial adelanto frente a las dictaduras militares, constatándose una verdadera proliferación de elecciones y reelecciones, por distintos motivos se ha producido, en tales democracias, un franco divorcio entre política y ciudadanía. De allí el énfasis que han ido adoptando los reclamos para radicalizar la democracia mediante el accionar de nuevos protagonistas como la multitud, la cual, en distintos expositores de renombre (Hardt, Negri, Virno), ha llegado a ser concebida como el único agente capaz de realizar la democracia, el gobierno de todos por todos, estableciéndose una contraposición entre democracia extraparlamentaria y democracia nominal, encubridora de dominación.

Un planteo “conciliador” se ha experimentado en algunos gobiernos conosureños, mediante un cruce o amalgama entre partido gobernante y nuevos actores sociales, desde los cuales se han legitimado dichos gobiernos populares, sea mediante los mecanismos electorales clásicos, sea a través de experiencias comunitarias más cercanas a una democracia directa, sin excluir las reformas constitucionales de fondo. Es por ello que no cuesta demasiado asociar ese proceso político con la emergencia rupturista de sujetos colectivos históricamente desplazados que pasan a

cumplir un papel central, como es el caso de los sectores indígenas en países como Ecuador o Bolivia, donde se ha articulado el primer Estado pluricultural de América Latina y una Asamblea Legislativa Plurinacional, base del poder popular y sucesora de órganos elitistas como el Congreso o el Parlamento.

Ante semejantes circunstancias, podría aludirse a democracias con fuertes tintes aborígenes, parafraseando a Ernesto Guevara, cuando éste, medio siglo atrás (diciembre 1959), al recibir el doctorado *honoris causa* en Santa Clara, apelara a la necesidad de que la universidad cubana se pintase de negro y mulato —haciéndose cargo del aniquilamiento indio durante la conquista—, para que la enseñanza no fuera fruto del privilegio que detentan los pudientes y antes de que el pueblo pintara las universidades con el color que mejor le pareciese.

No obstante, cómo soslayar el hecho de que, junto al peligroso avance de la derecha, existen situaciones denigrantes para el movimiento indígena. Puntualmente, en Chile, así como se ha embestido contra las protestas estudiantiles y las demandas obreras, se ha condenado a los mapuches a vivir en un estado de sospecha permanente bajo el cargo de terrorismo potencial y bajo



la negación de una cultura inveterada como la suya. Las Naciones Unidas han aplicado drásticas sanciones a un gobierno que sólo dedica el 0,3 % de su presupuesto a políticas indígenas, con miles de niños de ese origen que cada vez hablan menos sus propias lenguas por falta de respaldo pedagógico; mientras tanto, la primera mandataria chilena, en un reportaje televisivo, no admite que su país se comporte arrogantemente y sostiene, por lo contrario, que es “sencillo, austero y humilde”.

Algo similar ocurre en el Perú, donde, en la selva amazónica, se ha cometido una flagrante masacre de sus aborígenes —conceptuados por el presidente Alan García como enemigos del desarrollo—, para despojarlos de sus tierras y entregarlas al capital privado —compañías petroleras, empresas madereras y productores de biocombustibles—, dentro de las condiciones leoninas impuestas por los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Tamaña represión, ejecutada desde aire y tierra como en la noche de Tlatelolco, no sólo ha incluido el cierre de los medios alternativos que dieron cuenta de ello, sino que ha generado un repudio multitudinario por parte de intelectuales americanos y europeos.

Por añadidura, la CIA ha venido anunciando el surgimiento de una revolución indígena, de corte fundamentalista, que amenaza los valores occidentales; formulaciones coincidentes con los planteos neoconservadores, enarbolados por la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) comandada por Luis María Aznar desde España y con poderosas ramificaciones en nuestro continente, donde, según lo enuncia aquél en un documento inicial, se abren dos caminos diferentes: el de “las sociedades abiertas, libres y prósperas” o el de la “alianza antisistema” —inspirada por “la izquierda que fracasó en mayo del 68”—, compuesta por el populismo revolucionario, el indigenismo racista y el militarismo nacionalista... La supina ignorancia del político hispano sobre la diversidad y la complejidad que poseen las culturas originarias ha dado lugar a que se acuñara irónicamente una nueva expresión: el aznoindigenismo...

Con ayuda de los medios masivos y los capitales concentrados, que deforman la realidad a su antojo y paladar, se pretende reintroducir la vieja ideología sobre el salvajismo y la incapacidad de nuestros pueblos, para mantenerlos en caja y desconocerles derechos elementales. Las apreciaciones descalificadoras han sido retomadas actualmente por diferentes voceros del privilegio para dirigir las a los procesos, agrupaciones y



líderes orientados hacia políticas populares y hacia programas de integración, menos excluyentes y menos mercantilistas, donde se priorizan los recursos internos, la justicia social, los derechos humanos, una gran patria común con democracias participativas y políticas exteriores de neutralidad y autodeterminación. Por otra parte, se reimplementa la concepción colonialista del continente enfermo y se fabrican caracteres inherentes a la personalidad de los gobernantes presuntamente populistas, quienes no sólo aparecen como poseídos por la arbitrariedad (caprichosos, vanidosos, iracundos, intratables) sino también dotados de un lastre visceral tradicionalmente atribuido a una actitud mental propia de los líderes criollos sudamericanos: la imprevisión, madre de todos los vicios renuentes al progreso y a la modernización, una condena irremisible de antemano por más emprendimientos innovadores que puedan contraponérselos a ese mismo *diktat*, según lo han venido testimoniando dichos gobernantes mediante sus intentos de recuperación del patrimonio y las riquezas nacionales.

Así y todo, sobre el filo del bicentenario del conato emancipador decimonónico, con el advenimiento de gobiernos más sensibilizados y de democracias sustantivas, con la institucionalización de organismos regionales y el protagonismo de los movimientos sociales e indígenas, va cobrando cuerpo una nueva hora americana, en la cual puede renacer y afianzarse el sueño bolivariano que suscitó tantos desvelos generacionales. No se está aludiendo por cierto a una hora cartográfica sino a un tiempo basado en la protección de los pueblos, de la sociedad civil y del mismo medio ambiente. ■

Hugo E. Biagini. Argentino, doctor en filosofía. Es miembro de la Academia de Ciencias, en Buenos Aires. Una primera colaboración suya apareció en el número 3 de *Archipiélago* (septiembre-octubre 1995).